

El golpe de estado en El Salvador ¿Un camino hacia la democratización?

FERNANDO FLORES PINEL

“Puesto que ningún hombre tiene autoridad natural sobre su semejante, y puesto que la fuerza no produce ningún derecho, quedan, pues, las convenciones como base de autoridad legítima entre los hombres”.

JUAN JACOBO ROUSSEAU, *El Contrato Social*.

RESUMEN

Este ensayo analiza el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Tiene como propósito fundamental aportar un primer esquema de aproximación analítica ante ese acontecimiento. Se interesa en plantear aquellas razones que condujeron al fenómeno, para desde allí, estudiar las posiciones de las fuerzas sociales frente a la Junta Revolucionaria de Gobierno que siguió de la insurrección militar. El análisis es de tipo coyuntural, aunque no ignora los fondos estructurales que dominan al proceso. Fue escrito en los primeros días del golpe por lo que su validez es, como se pretendía, coyuntural.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo analiza provisionalmente los acontecimientos políticos de octubre que terminaron con el gobierno del general Carlos Humberto Romero. Contiene tres grandes partes. En la primera que denomino sistematización analítica del problema, pretendo recuperar el fenómeno por lo que él tenía de coyuntural, y presentarlo como una alternativa política que se originó al interior del Estado, y ha tenido su expresión desde ese mismo Estado. A partir de aquí analizo las razones que a mi juicio llevaron al desencadenamiento del golpe como un mecanismo de control social. Puntualizo los niveles de crisis coyuntural que el país vivía en esos momentos al nivel interno, el aporte que proporcionó a esas crisis la política del presidente Carter, y el rol de arbitraje que jugaron las fuerzas armadas para encontrar esa alternativa. Estos fenómenos están me-

diados por la posición de las fracciones de la clase dominante ante el gobierno anterior, y el tipo de óptica que adoptó ante el fenómeno el establecimiento militar salvadoreño. En la segunda parte hago un análisis de la posición de las fuerzas sociales ante la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esas fuerzas las clasifico desde el punto de vista ideológico, en función de su oposición o promoción a cambios sociales en El Salvador. Desde aquí trato de encontrar cuáles de esas fuerzas pueden constituir, sea apoyo, sea oposición al nuevo gobierno, tratando de ver cuáles son los apoyos y oposiciones fundamentales y secundarios.

Esto me sirve de base para en la tercera parte plantear algunas conclusiones generales que intentan responder a si este proceso puede conducir al país por alguna de las formas democráticas de gobierno.

La hipótesis que se encuentra implícita en el trabajo es que en la coyuntura que se abrió en El Salvador desde el fracaso de la transformación agraria en 1976, el esquema político vigente no podía darle solución a los problemas que en gran medida se derivaron de allí, pero que fincaban sus raíces más profundas en la estructuración histórica de la sociedad salvadoreña. Para encontrar una vía posible de solución, que al mismo tiempo que satisficiera las demandas populares, se evitara una tremenda explosión social, fuerzas políticas salvadoreñas provenientes de lo que llamo la izquierda democrática (fundamentalmente la Democracia Cristiana), se aliaron con sectores industrialistas del capital, con el beneplácito de la política exterior norteamericana, para generar la alternativa de octubre de 1979.

La hipótesis no ha podido ser probada fehacientemente, pero de un modo heurístico creo que se ha podido dar de ella, a lo largo del ensayo, una explicación inicialmente satisfactoria. No obstante el fenómeno precisa análisis más profundos hacia el futuro.

2. SISTEMATIZACIÓN ANALÍTICA DEL PROBLEMA

Considero que El Salvador ha vivido una crisis permanente desde 1932. Consiste en el desarrollo de un conjunto de condiciones sociohistóricas (crecimiento demográfico, participación política castrense, crecimiento industrial desde 1950, emergencia de partidos políticos oficiales y de oposición, robustecimiento del movimiento sindical, etcétera) que en la medida en que evolucionan inviabilizan las posibilidades de reproducir el modelo social vigente (dominación sociopolítica de la oligarquía agro-exportadora), pero al mismo tiempo se encuentran alternativas para coexistir con la crisis (golpes de Estado y participación política electoral: 1931, 1948-50, 1969-61, 1979) mediante la producción y reproducción

de ciclos de control social (prudismo en la década del cincuenta, pece-nismo en la década del sesenta, seguridad nacional en la década del se-tenta, y quizás democristianismo para la década del ochenta) que evitan que la crisis conduzca a una sustancial ruptura histórica. Al interior de esta crisis generalizada, y en relación con los "ciclos de control so-cial", es importante, que distingamos dos niveles.

Un primer nivel (primordial) hay que situarlo como crisis estructural (de larga duración) ¹ Esta crisis se manifiesta por la persistencia de con-diciones socioeconómicas (estructura agraria) que constituyen la parte sustancial de los problemas nacionales aún no resueltos. Tiene su raíz en la ubicación de la oligarquía terrateniente y sus aliados en el espacio social salvadoreño, y en el tipo de relaciones (económicas, políticas e ideológicas) que establece con los demás sectores al interior del sistema social. De aquí surge una crisis estructural que tiene su propia racionalidad para producir su autoconservación.

El segundo nivel percibe la crisis no en cuanto estructura, sino en cuanto momento histórico de la estructura en que se condensa "expo-nencialmente" la conflictividad social salvadoreña (terrorismo de las ex-tremas derecha e izquierda, represión política gubernamental, presiones externas norteamericanas, lucha de las masas en la calle, huelgas obreras y paros patronales, etcétera), y se expresa mediante la agudización de los enfrentamientos que fincan sus raíces en la estructura. A este segundo nivel se le puede denominar crisis coyuntural.

La crisis coyuntural salvadoreña ha sido un fenómeno hasta hoy de corta duración (prácticamente desde 1976 con la transformación agraria, y agudizado desde 1977 por el fraude electoral) en sus rasgos más sig-nificativos. Ellos son:

a] Una intensa lucha social a todos los niveles. Enfrentamiento entre fracciones de la clase dominante, lucha guerrillera en contra del gobierno y los sectores nacional y extranjero del capital; uniones y divisiones entre los partidos políticos de oposición (desintegración de la Unión Nacional Opositora, UNO), y lucha de ellos contra el gobierno, etcétera.

b] Una imposibilidad histórica del esquema político (seguridad na-cional en su versión nixoniana) ² en decadencia para encontrar alter-

¹ Sobre la crisis de larga duración desarrollé un pequeño trabajo (que existe mí-meografiado en nuestro departamento de Ciencia Política y Sociología) para un curso de Historia durante el semestre marzo-julio de 1977.

² Esta distinción la hago en: Flores Pinel, Fernando. "Comentario a la Exposición de la Doctrina de la Seguridad Nacional", Cuadernos de Filosofía, UCA, San Salvador, julio de 1978.

Un desarrollo más extenso lo tengo en: Flores Pinel, Fernando. "El Estado de Seguridad Nacional en El Salvador: un fenómeno de crisis hegemónica", ponencia presentada en la Conferencia sobre Cooperación Internacional en el Caribe, Cen-tro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, México, agosto de 1979.

nativas de solución a la crisis mediante el diálogo y la negociación³ que rompieran con el binomio subversión-represión.

c] Un quiebre con las pautas de convivencia social del pasado reciente centradas en su mayoría en la aplicación de las normas del Estado de Derecho.⁴

d] La apertura de nuevos espacios políticos caracterizados por la presencia social y combativa de organizaciones populares que se fortalecían a medida que transcurría el tiempo.

La crisis coyuntural salvadoreña vista en estos términos condujo al planteamiento de un desafío político entendido como una forma de conciencia generalizada en la población, pero especialmente en aquella parte organizada política y gremialmente, de que existían problemas agudos a los que el esquema político vigente no podía encontrarles respuesta. El punto fundamental aquí es la toma de conciencia en el sentido de un darse cuenta de que de no hallarse alternativas el camino único era una violenta explosión.

Esta crisis coyuntural se relaciona estrechamente con, y en gran medida depende de, la crisis estructural. Sin embargo no se abordará como crisis estructural, sino como crisis coyuntural en el plano político, aunque el análisis tenga que hacer referencia a la crisis en la estructura. Esto significa que la crisis política salvadoreña no se va a entender aquí como una crisis de dominación social en general, sino como una crisis que parte del Estado salvadoreño en tanto que objeto principal de las pugnas y conflictos para agenciarse su control, y que, por tanto, tiene su alternativa de solución en octubre de 1979 desde y a través del Estado mismo.

2.1. *Percepción del momento actual*

El 15 de octubre de 1979 se actualizaron viejos y nuevos problemas en la sociedad salvadoreña. Una coyuntura caracterizada por la concreción de múltiples y contradictorios acontecimientos se han conjugado en una "abigarrada" combinación de procesos internos y externos.

Todo es posible en estos momentos en El Salvador. Los contornos de las posibilidades entendidas como la fijación de límites en el sistema político más allá de los cuales no se podía avanzar por la organización siste-

³ En otro trabajo esto lo he analizado como autismo político, véase: Flores Pinel, Fernando, "La Seguridad no es Negociable: un Testimonio de Fe Política", ECA Nº 355, San Salvador, mayo de 1978.

⁴ Sobre este punto véase Campos A., Tomás, "La seguridad nacional y la Constitución salvadoreña", y Ungo, Guillermo Manuel, "Los derechos humanos, condición necesaria para la paz y la convivencia social en El Salvador", ECA Nos. 369/370, San Salvador, julio-agosto de 1979.

mática de los métodos represivos, y más acá de los cuales no se podía vivir sin el riesgo de una explosión social acompañada de incalculables consecuencias, se han flexibilizado en parte, permitiendo nuevos tipos de expresión política que ensanchan considerablemente los contornos de las posibilidades.

Estos nuevos tipos de expresión política evidencian objetivos disímiles y contradictorios entre fracciones de la clase dominante, entre grupos importantes del estamento militar, entre diversas formas de organización y lucha de las clases populares, etcétera, lo cual genera temores y esperanzas sobre éxitos y fracasos.

Desde esta percepción se intenta en este trabajo encontrar alguna forma de explicación a lo que ha ocurrido, y pueda ocurrir en el futuro. Esta explicación es una entre otras posibles, por tanto, estará acompañada de parcialidades y deficiencias.

2.2. *La crisis política interna: las razones endógenas del golpe de Estado*

La idea central aquí es que desde hace una década (cuando la guerra con Honduras) comenzó a producirse un divorcio entre fracciones de la clase dominante.⁵ Esta crisis de relación orgánica se originó con la ruptura del Mercado Común Centroamericano debido a las novedades que el proceso integracionista generó al nivel de esa clase social. Vía el Mercomún las reformas en la estructura agraria interna de El Salvador se desplazaron hacia un futuro indeterminado.

El estamento militar (en el cual hay que distinguir etapas que no haré aquí)⁶ había devenido en clase políticamente gobernante, y fue relativamente capaz hasta 1969 de arbitrar conflictos entre facciones de la clase dominante, y entre ellas y los sectores populares.

Sin embargo, el ejercicio continuado del poder institucionalizado al interior del estamento militar,⁷ y articulado orgánicamente en el Estado por la gestión directa del gobierno,⁸ condujo en el proceso a una estrecha alianza entre la fracción más retardataria del capital nacional (capital agrario) y las fuerzas armadas. Esta alianza (vinculada con la ruptura del Mercomún) garantizó políticamente durante la última década la per-

⁵ Este fenómeno lo analizo más detenidamente en: Flores Pinel, Fernando. "Entre la guerra y la paz; el conflicto honduro-salvadoreño 1969-1979", ECA Nos. 369/370, San Salvador, julio-agosto de 1979.

⁶ Véase Mariscal, Nicolás. "Militares y reformismo en El Salvador", ECA Nos. 351/352, San Salvador, enero-febrero de 1978.

⁷ Véase: Flores Pinel, Fernando. "Programas de gobierno y coyuntura política pos-electoral", ECA Nº 341, San Salvador, marzo de 1977.

⁸ Véase: Andino Martínez, Carlos. "El Estamento Militar en El Salvador", ECA Nos. 369/370, San Salvador, julio-agosto de 1979.

manencia de los militares en el gobierno, pero al costo de perder crecientemente su legitimidad social y destruir paulatinamente la relativa autonomía del Estado.

No estudiaremos aquí cómo los militares llegaron a este punto.⁹ Pero sí quisiera subrayar que su cada vez más amplia participación política se debió a una crisis de hegemonía de la oligarquía terrateniente. Desde 1932 esta crisis se ha caracterizado por la incapacidad histórica de la oligarquía, para imponer en forma consensual, al interior de la sociedad salvadoreña, su proyecto político de clase, como representando los intereses generales de la nación.

Paulatina, pero crecientemente, la oligarquía salvadoreña se ha ido tornando cada vez más inflexible para responder a los desafíos que los cambios históricos planteaban. Su ideología y su práctica política han devenido crecientemente en la obsolescencia, y con ello, su capacidad para reacomodarse y reacomodar las fuerzas políticas internas y articular las presiones externas (fundamentalmente norteamericanas) en esquemas ideológicamente aceptables, socialmente renovadores, económicamente eficientes y políticamente posibles.

Esta crisis ha generado un espacio político que ningún grupo social ha sido capaz de llenar efectivamente exceptuando, en alguna forma, el establecimiento militar salvadoreño. Sin embargo, esta crisis hegemónica no ha significado una crisis total del poder oligárquico, sino que éste ha conservado la principal capacidad de veto para bloquear los cambios sociales, económicos y políticos. Así lo hizo en 1932, lo repitió contra el movimiento de la juventud militar en 1948-1950, en 1961 fue capaz de derrocar a la Junta de Gobierno que había depuesto a la dictadura de José María Lemus, en 1969 presionó con éxito para invadir Honduras, y finalmente en 1976 neutralizó el proyecto de transformación agraria.

El intento del establecimiento militar salvadoreño para reproducirse como clase gobernante fue lo que principalmente potenció su alianza con la oligarquía terrateniente. Sobre esta base el sistema político salvadoreño no solamente se volvió rígido en sus manifestaciones dictatoriales, sino que eliminó por la vía de la exclusión política a todo tipo de oposición al régimen imperante. Las posibilidades de negociar los conflictos se nulificaron desde la óptica de un esquema de seguridad nacional (conflicto bipolar subversión-represión).

Este escenario político creó las condiciones propicias para que germinaran (desde 1970-1971) grupos extremistas de izquierda disímiles, en sus propósitos, orientaciones y esquemas ideológicos, aunque todos ellos tuvieran como inspiración común al marxismo. La política de los últimos dos gobiernos (1972-1977 y 1977-1979) abonó favorablemente el terreno para que el extremismo de izquierda pudiera atraer a su propio campo a sectores amplios de las masas populares. De aquí que la extrema iz-

⁹ Algo de esto he analizado en la ponencia que presenté en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, antes citada.

quiera surgió objetivamente, y creció en importancia histórica, no porque voluntariamente sus dirigentes lo desearan así, sino porque realmente no les quedó otra alternativa socio-política.

Paralelamente al crecimiento de la extrema izquierda los partidos políticos de oposición tradicionales (en el sentido de que su modo de conquista y adquisición del poder estatales por la vía electoral, y su forma de lucha socio-política es el parlamentarismo) fueron perdiendo parte de su clientela electoral en favor de las organizaciones populares extremistas (BPR, FAPU, LP 28). Estos partidos (sobre todo el PDC) manifestaban un gran "raquitismo político" derivado, por una parte, de la represión gubernamental; y por otra, del decantamiento de sus bases electorales.

En este esquema de conflictividad las organizaciones populares se articularon con movimientos guerrilleros, e incluso nacieron como consecuencias de ellos, configurando en su modo de actuar público un movimiento con características insurgentes. A cada movimiento guerrillero le ha correspondido una organización popular. Esto se indica en el cuadro que aparece a continuación:

MOVIMIENTO POPULAR INSURGENTE

<i>Angulo de las Organizaciones Populares.</i>	<i>Angulo de los Grupos Guerrilleros.</i>
BPR: Bloque Popular Revolucionario.	FPL: Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí".
LP 28: Ligas Populares 28 de Febrero.	ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo.
FAPU: Frente de Acción Popular Unificada.	FARN: Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional.

A medida que el movimiento popular se fortalecía y los partidos políticos se debilitaban, el gobierno surgido del fraude electoral de 1977 se volvía cada vez más incapaz de ejercer la dominación en forma efectiva, y la represión indiscriminada tomaba el carácter de la única respuesta que se ideaba para enfrentar la crisis.

Los sectores ultra-derechistas (oligarquía terrateniente y sus aliados) probablemente (no tenemos datos que así lo demuestren) con la complicidad gubernamental transformaron a ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) en un instrumento de represión campesina, y crearon a su vez nuevos organismos que ejecutaban un terrorismo de extrema

derecha (UGB; Unión Guerra Blanca; MANO: Movimiento Anticomunista Nacional Organizado).

El terrorismo de extrema derecha y la represión gubernamental redujeron la participación política pacífica y legal a su mínima expresión. Únicamente quedó como contestatario principal del gobierno el sector progresista de la Iglesia Católica, y dentro de él, particularmente, la Arquidiócesis de San Salvador encabezada por monseñor Oscar Arnulfo Romero. Esta reducción del espacio político legal incrementó las posibilidades de los extremistas de izquierda y de derecha. El auge del terrorismo caracterizó la vida política salvadoreña hasta el 15 de octubre de este año.

2.3. *Las presiones de la administración Carter contra el régimen de Romero, y la articulación de alianzas políticas internas*

A esta crisis política generalizada y profunda vinieron a sumarse las presiones de la administración demócrata. Estas se incrementaron a partir del triunfo del Movimiento Sandinista en Nicaragua.

No analizaré aquí los móviles más generales de las presiones norteamericanas a partir de sus vinculaciones con la sociedad internacional contemporánea y sus problemas domésticos. El caso Watergate, la distensión internacional, y la redefinición de la hegemonía político-económica al interior del mundo occidental mediante el proyecto del grupo trilateral, han jugado en estos acontecimientos su papel.¹⁰

Lo interesante de señalar aquí es que en la nueva dimensión de la política exterior norteamericana podemos encontrar dos móviles importantes:

1. Intereses de naturaleza económica que se asocian con la fase de transnacionalización productiva del capital, proceso al que se opone para

¹⁰ En otros trabajos he analizado en forma relativamente extensa estos fenómenos. Véase: Flores Pinel, Fernando. "Programas de Gobierno y Coyuntura Política Pos-Electoral", *op. cit.*, el apartado que se refiere a la nueva dimensión de la diplomacia norteamericana, pp. 186-192; "La Gran Paradoja de la Política Mundial Contemporánea", ECA N° 350, San Salvador, diciembre de 1977; "De la Guerra Fría a la Distensión. El Mundo Occidental en Crisis", ECA Nos. 351-352, San Salvador, enero-febrero de 1978; "Las Fuerzas Centrífugas en el Mundo Socialista: Del Stalinismo al Policentrismo", ECA N° 353, San Salvador, marzo de 1978; "El Trilateralismo una nueva dimensión en las Relaciones Internacionales del Mundo Occidental", Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, N° 8, UCA, San Salvador, enero de 1975; "Una Nueva Alianza entra en escena; Washington y Pekín", ECA Nos. 363-364, San Salvador, enero de 1979, "Terror y Esperanza: entre el genocidio y el somnocio en Nicaragua", ECA, N° 359, San Salvador, septiembre de 1978; "Carazo: visita por razones de petróleo", Boletín de Ciencias Económicas y Sociales N° 12, UCA, San Salvador, junio de 1979.

que llegue a El Salvador, la oligarquía salvadoreña, no solamente por las transformaciones que esto suponía en el agro, sino también por el control que ella tiene sobre el aparato financiero nacional.

2. Intereses de naturaleza estratégico-militar (no obstante que existe un proceso internacional de distensión) para bloquear todo tipo de posibilidad histórica que permita una ventana a la influencia soviética en Centroamérica.

En este último punto la política norteamericana ha evolucionado. Ahora comprende que la influencia soviética no puede fácilmente penetrar, y colocarse en forma profunda y duradera en una sociedad, solamente por el hecho de que en ella haya ocurrido una revolución. Ha comprendido que los movimientos revolucionarios tienen especificidades históricas que no puede fácilmente subordinar Moscú. Ha entendido que una política anti-comunista a ultranza ha sido la principal razón para que la Unión Soviética obtenga lo que Washington deseaba evitar.

Esta perspectiva en la administración Carter se ha asumido en el sentido de que Estados Unidos no quiere correr el riesgo de rebeliones populares en sus áreas de influencia vitales, como tampoco quiere llegar excesivamente tarde a rescatar un proceso que se ha inclinado definitivamente por una alternativa revolucionaria, lo cual lo obligaría ya sea a la intervención directa, ya sea al retiro. Ejemplos recientes han sido Irán¹¹ y Nicaragua.

En este orden fue particularmente ilustrativo el Informe de Viron Vaky ante la Cámara de Representantes. Después de analizar la situación en Centroamérica, y particularmente de que El Salvador constituía lo que se puede llamar el "eslabón más débil" del Istmo, el señor Vaky concluía, entre otras cosas, que:

"Centroamérica es una región en la cual existen profundos anhelos de cambio, en la cual graves iniduidades y problemas estructurales crean presiones políticas, y en la cual quejas legítimas provocan exigencias fundamentales de equidad y reconocimiento. En el sector norte¹² esos desequilibrios han tropezado con procesos relativamente cerrados o inflexibles que hacen sumamente difícil que aquéllos sean atendidos o siquiera expresados. *Las consiguientes tensiones resultan en una polarización que si no se la aminora dará lugar a una radicalización y a que elementos extremistas se adueñen de causas legítimas y las perviertan...* Si no nos ponemos del lado de las aspiraciones legítimas del pueblo en estos países... Habremos de colocarnos en el lado indebido de la historia". (El subrayado es nuestro)¹³

¹¹ Véase "Irán: Religión y Política concentradas", ECA N° 365, San Salvador, marzo de 1979.

¹² Se refiere a Guatemala, Honduras y El Salvador.

¹³ Testimonio de Vaky ante la Cámara de Representantes, Agencia de Comunicación Internacional, Embajada de Estados Unidos, San Salvador, septiembre de 1979; pp. 26-27.

Las presiones norteamericanas venían desde el gobierno del coronel Molina. Se redujeron en 1977 debido al cambio de administración en los dos países. Las presiones reaparecieron cuando el gobierno del general Romero se mostró incapaz de restablecer el equilibrio político perdido. Ni el gobierno, ni su aliado fundamental (oligarquía terrateniente) fueron capaces de absorber las presiones estadounidenses. Esto se debió a tres razones fundamentales.

a] La oligarquía terrateniente reaccionó con su más firme negativa a permitir una intromisión en los asuntos internos de El Salvador. El gobierno se acogió al principio de no intervención.

b] No prosperaron los intentos gubernamentales de negociar con los partidos políticos de oposición para unas elecciones libres de diputados y alcaldes en 1980. La razón fundamental fue el cuadro insurreccional que planteaban las organizaciones populares. Si los partidos de oposición hubieran aceptado, en ese momento, firmaban su acta de "defunción política". Esta componenda les hubiera acarreado repudio popular liquidando sus posibilidades de ascender al poder por la vía electoral.

c] También fracasó el intento del gobierno para montar un foro nacional en el cual debería pactarse un plan de democratización y solución a la violencia. El fracaso se debió a que la oposición democrática se negó a participar (sector progresista de la Iglesia Católica, universidades, partidos políticos de oposición y sindicatos), y a que el foro excluía por subversivas las organizaciones populares, punto que no aceptó la oposición democrática.

Estas razones inmediatas del fracaso tenían su racionalidad última en procesos políticos más profundos. Ellos son:

i] Un divorcio progresivo entre los sectores modernizantes del capital nacional cuyos intereses se orientan primordialmente a la industria, y el sector más retardatario vinculado al agro.

ii) La alianza del Partido Demócrata Cristiano con los sectores del capital modernizante. En este punto la democracia cristiana actuó cohesionadamente, más allá de sus divisiones internas entre la "vieja guardia" de los años sesenta, y la "nueva guardia" de los setenta. El símbolo de esta cohesión es José Napoleón Duarte (exiliado desde hace siete años y quien retornó el 28 de octubre de este año) debido a que él garantiza la clientela electoral del partido ante eventuales elecciones.

Esta alianza del pdc no solamente se explica por su ideología reformista, y la naturaleza de clase de su dirigencia, sino y principalmente porque su base policlasista electoral estaba siendo minada por las organizaciones populares. El partido sufría una crisis en su existencia misma. Detenía esa crisis, o simplemente perecería.

De aquí no se sigue que ellos estuvieran involucrados en el golpe, pero sí que había suficientes razones para que, una vez ocurrido esto, lo apoyaran.

III] La benevolencia del Departamento de Estado para que esa alianza no solamente existiera como tal, sino que existiera para convertirse en una alternativa de poder que terminara, en el proceso, por derrotar a la extrema izquierda.

2.4. *El pentágono y el establecimiento salvadoreño*

Si bien los aspectos antes señalados son condiciones necesarias para hacer inteligibles tanto el golpe de Estado como la composición del gobierno que siguió, no fueron condiciones suficientes. Es importante vincular lo anterior con la variación militar que intervino en el proceso.

2.4.1. *¿Participación norteamericana en el golpe?*

La situación salvadoreña era evaluada por la administración demócrata desde una óptica doble: el desprestigio internacional de las dictaduras militares al que ella misma había contribuido, y los procesos internacionales de distensión.

Desde esta doble óptica Estados Unidos estaba comprometido en relación a Centroamérica para generar lo que flamantemente se califica como un proceso democratizador. Proceso que comenzó a perfilarse para Estados Unidos desde los Informes Linowitz sobre América Latina, y que tomó su forma con los derechos humanos.

Los niveles de represión que con el escudo del anticomunismo se mantenían en El Salvador no eran ni coherentes con el discurso ideológico de la administración Carter, ni convenientes para promover las transformaciones que la misma administración ha alentado.

En este sentido se puede aseverar que Estados Unidos alentó el golpe de Estado, por lo menos de una manera indirecta, aunque no podríamos afirmar, por falta de pruebas suficientes, que lo planeó y contribuyó a su ejecución. Sin embargo, desde hace décadas la formación profesional de los militares salvadoreños ha estado influida por el Ministerio de Defensa norteamericano (Pentágono). Dos ejemplos pueden ilustrar este punto: uno ya histórico, y otro contemporáneo.

Entre 1945-1949 un total de 22 oficiales salvadoreños con los grados de subteniente, teniente, mayor y capitán salieron a estudiar al extranjero. De ellos sólo cinco estudiaron en instituciones que no eran norteamericanas. Esos cinco, a su vez, coinciden en algunos casos en que no se precisa

la institución específica que los recibió.¹⁴ Asumiendo que las instituciones no especificadas correspondían a escuelas que no tenían ninguna relación con el Pentágono, entonces el 73% de los militares salvadoreños con educación en el exterior durante ese periodo, recibieron su formación en Estados Unidos. En el período 1975-1979 asciende a 132 el número de oficiales (incluidos cadetes) que han ido a realizar estudios al exterior. En 109 casos Estados Unidos fue el otorgante único de la beca, o la compartió con el gobierno salvadoreño. El lugar de destino para los estudios fue en la mayoría de casos Panamá, y en la minoría, Estados Unidos.¹⁵ Entre 1975-1979 el Pentágono desempeñó un papel de primer orden en la formación del 79% de los oficiales salvadoreños becados al exterior. Tanto en términos absolutos como relativos la dependencia militar salvadoreña de Estados Unidos se incrementó en las últimas tres décadas y media.

Obviamente estos datos no son una prueba suficiente para asumir como válida la conjetura de que Estados Unidos estuvo implicado en el golpe de Estado de 1979, pero sí es una evidencia importante de que la política exterior norteamericana contaba con mecanismos ideológicos institucionales para influir preponderantemente en la voluntad política de los oficiales salvadoreños.

2.4.2. *El rol político del instituto militar salvadoreño*

No basta con la posibilidad objetiva de influencia desde el exterior para generar una alternativa política interna, es importante considerar también que las fuerzas armadas salvadoreñas han sido una corporación política en nuestra historia.

El papel político de los militares salvadoreños no solamente ha partido de sus formas constitucionales para ascender al poder del Estado mediante el empleo de partidos en contiendas eleccionarias (Pro-Patria, PRUD, PCN), sino también lo han hecho en muchas ocasiones a través de golpes de facto. El cuadro siguiente ilustra esta afirmación.

¹⁴ Datos obtenidos a partir de Diarios Oficiales de El Salvador correspondientes a esos años, Biblioteca Nacional, San Salvador.

¹⁵ Estos datos han sido elaborados a partir de el Diario Oficial de El Salvador para el período 1975-1979, correspondiente al renglón de becas al exterior otorgadas por la Presidencia de la República.

GOLPES DE ESTADO EN EL PERIODO 1841-1979 ¹⁶

<i>Periodos</i>	<i>Conatos de golpes y golpes efectivos</i>
1841-1866	42 golpes efectivos
1890-1915	3 golpes efectivos
1916-1941	1 conato y 1 efectivo
1944-1961	5 golpes efectivos
1962-1979	1 efectivo y varios conatos
1841-1979	52 golpes efectivos

Exceptuando las posibilidades de una revolución social violenta, y sobre todo desde 1932 a la fecha, se ha convertido en un verdadero axioma histórico afirmar que ningún cambio significativo puede ocurrir en el Salvador, ya sea en un sentido regresivo o en otro progresista, si éste no cuenta con la participación activa del establecimiento militar. Primordialmente en los últimos cuarenta años el establecimiento militar salvadoreño ha devenido en una clase políticamente gobernante, y como tal ha tendido a reproducir las condiciones de su dominación ya sea creando instrumentos legales como partidos políticos, o ya sea adjudicándose el derecho de rebelión cuando esos instrumentos han dejado de funcionar por modificaciones operadas al interior de la sociedad.

Cuando el sistema político salvadoreño entra en fases de crisis agudas, el rol histórico de las fuerzas armadas, ha consistido en asumir el carácter de un árbitro en la conflictividad para evitar que la crisis llegue hasta sus máximas consecuencias. Este arbitraje tiende a restablecer el equilibrio perdido y a recuperar una relativa autonomía del Estado.

Desde 1961 la pauta del comportamiento político de los militares se había institucionalizado, en el sentido de que era la corporación en tanto tal, mediante negociaciones con fracciones de la clase dominante, la que decidía las sucesiones presidenciales. Esto había evitado los golpes de Estado porque ni el caudillismo, ni los intereses personales, lograban prevalecer sobre las decisiones institucionales.

¹⁶ El cuadro no contempla datos entre 1867-1891. Las fuentes empleadas para estos datos son los siguientes: Dalton, Roque, *El Salvador* (monografía) Ed. Enciclopedia Popular, La Habana 1965; *La Gaceta de El Salvador y El Constitucional* para el período 1841-1866; Vidal, Manuel *Nociones de Historia de Centro América*, Editorial Universitaria, San Salvador (f.s.); *El Libro de Oro de La Prensa Gráfica para el período 1915-1965*. Puede ser que se haya escapado en la revisión rápida del material empírico algún golpe de Estado. Sin embargo esto no desvirtúa en conjunto la idea que aquí estamos sosteniendo.

Parte de esta institucionalización en los relevos políticos se explica por una circulación de las élites militares en función de las promociones de oficiales. Sin embargo en 1977 se rompió esta regularidad con el ascenso del general Romero al gobierno. Una promoción de oficiales a la que no correspondía la gestión gubernamental tomó el lugar de aquélla que por "derecho consuetudinario" debía ascender al poder.

Con esto no queremos decir que la causa principal del golpe de Estado haya sido este fenómeno, pero indudablemente constituyó un factor que hizo percibir con una óptica nueva a la oficialidad joven, la crisis que el país vivía. Esta óptica partía de que si el grupo de los generales se mantenía a toda costa en el poder, se convertirían hacia el futuro en la fracción políticamente dominante de las fuerzas armadas, y los cánones de disciplina y jerarquía se tornarían en un valladar insalvable para los nuevos oficiales.

Cuatro factores se conjugaron para generar la alternativa de octubre de 1979.

1. Divorcio entre fracciones de la clase dominante.
2. Alianza entre la democracia cristiana y la fracción modernizante del capital nacional.
3. Promoción de la alianza anterior por parte de los Estados Unidos.
4. El arbitraje político de las fuerzas armadas para hacer funcionar ese proyecto de alianza, y colocarse ventajosamente en el futuro político que se avecinaba.

2.5. *El foro popular: un catalizador para el golpe de Estado*

Los cuatro factores anteriores fueron los de mayor peso. Constituyeron las bases para articular un nuevo pacto social que está ideológicamente plasmado en la proclama de las fuerzas armadas del 16 de octubre de 1979.

No obstante una alternativa diferente había comenzado a plasmarse. Esto es lo que se ha llamado el Foro Popular. Como contrapartida al Foro Nacional a que había convocado el gobierno del General Romero, catorce organizaciones sociales, entre las que estaban los tres partidos políticos de oposición (MNR, PDC y UDN), se pusieron de acuerdo en una plataforma mínima de reivindicaciones sociales, políticas y económicas, aunque cada una de las organizaciones continuaba conservando su propia autonomía. Se había podido incluir por primera vez a una organización popular de extrema izquierda (LP-28), con lo cual se abrían las posibilidades para una radicalización más allá de lo que se puede calificar como una izquierda tradicional¹⁷. El Foro Popular hasta el 15 de octubre era, a lo mucho, el germen de una verdadera alianza.

¹⁷ Izquierda en el sentido de que asumía las reivindicaciones populares. Tradicional porque se planteaba como métodos de lucha aquéllos establecidos previamente en los marcos jurídicos nacionales.

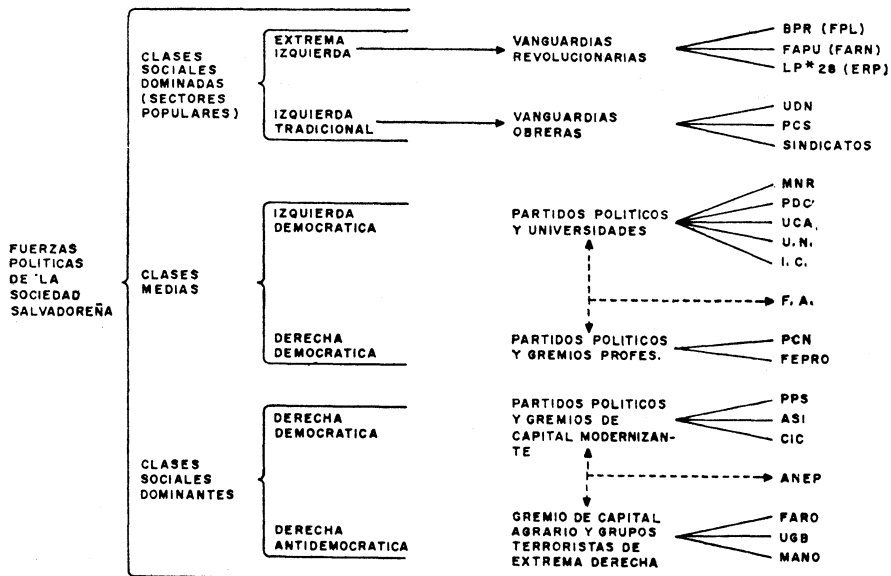
El avance del foro popular pudo haber significado en el proceso de crisis una alternativa de poder porque tal vez la Democracia Cristiana no hubiera tenido la capacidad suficiente para imponer su proyecto político a las trece organizaciones restantes.

El Foro Popular no tuvo tiempo para madurar su alianza y entrar en un proceso de articulación política entre todas sus organizaciones. Sin embargo, "catalizó" el golpe de Estado por las posibilidades que tenía para promover un movimiento de masas que trascendiera el simple radicalismo de la extrema izquierda.

3. LAS POSICIONES DE LAS FUERZAS SOCIALES ANTE EL GOLPE DE ESTADO

Los aspectos discutidos hasta aquí dan cuenta del golpe de Estado. Sin embargo las posibilidades que esta nueva fase de la coyuntura tenga, dependerán de las posiciones de las fuerzas sociales ante ese fenómeno. Esto es lo que se discutirá en este tercer punto.

Una discusión de esta naturaleza tiene que partir de un esquema mínimo que defina las fuerzas sociales en el espacio político. Este esquema aparece a continuación.



Significado de las siglas por el orden en que aparecen:

- BPR Bloque Popular Revolucionario.
 FPL Fuerza Popular de Liberación "Farabundo Martí".
 FAPU Frente de Acción Popular Unificada.
 FARN Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional.
 LP*28 Ligas Populares 28 de Febrero.
 ERP Ejército Revolucionario del Pueblo.
 UDN Unidad Democrática Nacionalista.
 PCS Partido Comunista Salvadoreño.
 MNR Movimiento Nacional Revolucionario.
 PDC Partido Demócrata Cristiano.
 UCA Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".
 U.N. Universidad Nacional.
 I.C. Iglesia Católica (Sector Progresista).
 F.A. Fuerzas Armadas.
 PCN Partido de Conciliación Nacional.
 FEPRO Federación de Asociaciones Profesionales.
 PPS Partido Popular Salvadoreño.
 ASI Asociación Salvadoreña de Industriales.
 CIC Cámara de Industria y Comercio.
 FARO Frente de Agricultores de la Región Oriental (no obstante su nombre cubre a todo el sector agrario del capital nacional).
 ANEP Asociación Nacional de la Empresa Privada.
 UGB Unión Guerrera Blanca.
 MANO Movimiento Anticomunista Nacional Organizado.

Antes de entrar al análisis de las posiciones de estas fuerzas sociales en relación a su comportamiento político ante el nuevo gobierno, conviene puntualizar el criterio con que han sido clasificadas: la ideología que manifiestan en orden a favorecer o entorpecer cambios sociales en El Salvador.

3.1 *Las clases sociales dominadas*

Aquí se ubican a los amplios sectores sociales salvadoreños que han sido históricamente excluidos del proceso nacional de toma de decisiones políticas importantes.

3.1.1. *La extrema izquierda de clases dominadas*

El extremismo de izquierda es heterogéneo. Sin embargo no se le analizará por lo que se diferencian, sino por lo que se unifican. Este denominador común se empleará como parámetro para evidenciar sus diferencias en relación a lo que son los rasgos comunes de los otros sectores señalados en el cuadro anterior.

Desde 1972 la extrema izquierda asume que en El Salvador no podrán ocurrir cambios pacíficos, sino que éstos deberán ser violentos, para destruir totalmente al Estado y a las estructuras sociales que lo cimentan. La vía electoral como forma de lucha por el poder la rechazan porque tiende a mantener aquello que piensan destruir.

Si por democracia hay que entender el "ejercicio de la soberanía popular" mediante elecciones en un sistema parlamentarista y multipartidario, diríamos que, en conjunto, la extrema izquierda lo rechaza porque reproduce el orden burgués.

Ellos plantean como estrategia una sociedad socialista a la que se llegará por la guerra popular prolongada y la insurrección popular mediante un esquema insurgente que combine la lucha guerrillera con un movimiento de masas campesinas y obreras. Por democracia ellos entienden la participación plena de las masas, a través de sus vanguardias revolucionarias, en un nuevo tipo de Estado que debe surgir de la destrucción del viejo Estado.

Su ideología se caracteriza políticamente por la inflexibilidad en las negociaciones con el objetivo de recrudecer las contradicciones sociales. Cuanto más violentas sean estas contradicciones, piensan ellos, mayores son las posibilidades de la revolución.

Su capacidad de fuerza ideológica guerrillera y organizativa al nivel de las masas populares se ha incrementado desde 1977. Sin embargo, esa capacidad incrementada, aún no es suficiente para generar un quiebre profundo en el sistema social, y comandar desde allí la construcción de una nueva sociedad y un nuevo tipo de Estado.

3.1.2. *Izquierda tradicional de clases dominadas*

Sus orígenes próximos parten desde la lucha contra el martinato. Ha crecido en fuerza y en presencia política. Se expresa en el escenario nacional articulando partidos políticos (PRAM, PAR Nueva Línea, UDN). Tras ellas se ha encontrado el Partido Comunista Salvadoreño de orientación moscovita.

Se plantea como horizonte último una sociedad socialista, pero cree que ese horizonte no se podrá historizar intempestivamente, sino que es importante pasar por un conjunto de mediaciones políticas según sean los momentos históricos. Admite el juego constitucional formalmente vigente en El Salvador, y rechaza la violencia como forma de lucha política, por lo menos en principio (no se compromete inicialmente con la vía). Manifiestan disposición para configurar un frente popular amplio que incluya a los diversos tipos de oposición progresiva.

Su diferencia fundamental con la extrema izquierda está en los medios y no en los fines. Asume que una lucha no es revolucionaria porque sea violenta, como también, que no es reaccionara porque sea pacífica.

La extrema izquierda los acusa de traidores y etapistas. Traidores porque no defienden las verdaderas causas populares desde el momento que

aceptan alianza con representantes políticos de la burguesía. Etapistas porque creen que la sociedad socialista no emerge intempestivamente, sino precisa pasos previos, como una plena democracia burguesa.

3.1.3. *La posición de las izquierdas de clases populares ante la Junta de Gobierno*

La extrema izquierda considera que su estrategia y sus tácticas iban por el camino del triunfo. De aquí que piensan que el golpe de Estado les ha robado su victoria. Algunos, como el BPR, la califican de autgolpe. Otros, como las LP*28 y el ERP, han reaccionado violentamente contra la Junta de Gobierno: sabotajes terroristas, manifestaciones, intentos de insurrección en Mejicanos y San Marcos.

La beligerancia ante el nuevo gobierno ha impedido que éste implemente con rapidez mecanismos políticos para conquistar el apoyo de las organizaciones populares de extrema izquierda. Su táctica hoy consiste precisamente en evitar que lo logren por los riesgos de aislamiento que para ellos significaría.

A diferencia de las LP*28-ERP, el BPR-FPL y el FAPU-FARN, han sido más cautelosos. Sin embargo su cautela no significa que estén dispuestos a un diálogo franco con la Junta de Gobierno. Más bien su significado hay que interpretarlo como una rearticulación para continuar su lucha.

En principio se puede pensar que la Junta de Gobierno no podrá conquistar su apoyo. La continuarán combatiendo. Sin embargo estos combates serán aprovechados por la derecha antidemocrática (extrema derecha) para crearse un espacio político que le permita, por lo menos, evitar que se cumpla la Proclama de las Fuerzas Armadas.

Los combates de la extrema izquierda no son de suyo tan peligrosos para la Junta de Gobierno, pero lo son las consecuencias que pueden derivarse de ellos: el espacio político para la derecha antidemocrática.

Por su parte, la izquierda tradicional apoya a la Junta de Gobierno. No obstante, este apoyo está condicionado al cumplimiento mínimo de la plataforma del Foro Popular. Este cumplimiento implica afectar a una fracción del capital. No cabe duda que la Junta de Gobierno se planteará seriamente ese cumplimiento, pero él tendrá por límites la legitimidad social que conquiste, y la efectividad con que impida la reacción de la derecha antidemocrática.

En conjunto, por el lado de las izquierdas, el apoyo con que contará el nuevo gobierno no puede ser más que débil.

3.2. *Las clases medias*

Aquí se ubica a los sectores sociales que tienen mayor participación en los roles de liderazgo social. Este liderazgo se ha definido no por su cola-

boración con gobiernos precedentes, sino por su oposición, aunque existen en ellas grupos vinculados al régimen anterior.

Las organizaciones que comandan constituyen los principales soportes del sistema social, no en cuanto a las estructuras, sino por lo que toca a las superestructuras.

3.2.1. *Izquierda democrática de clase media*

Izquierda democrática designa a los grupos de clase media opositores a los regímenes precedentes y que se encuentran articulados en partidos políticos y universidades (UCA, Universidad Nacional). Manifiestan tendencia a luchar dentro de los marcos constitucionales vigentes en El Salvador, pero interpretándolos con un contenido democrático que favorezca prioritariamente a las mayorías populares.

Se plantean la urgencia de que en El Salvador funcione un pleno Estado de Derecho que garantice aspectos fundamentales como los siguientes:

a] En el plano político: libertad a los presos políticos y esclarecimiento sobre los desaparecidos; retorno de los exiliados políticos; cese de las capturas ilegales; libre participación de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones campesinas; disolución de cuerpos armados paramilitares; etcétera.

b] En el plano económico: implementar un proyecto de reforma agraria, redistribuir equitativamente el ingreso nacional; reconstrucción de un proyecto de integración económica centroamericana; control de la inflación y aumento real de salarios para los trabajadores del campo y la ciudad, etcétera.

c] En el plano social: atención médica adecuada para las mayorías populares; solución al problema de la vivienda en todo el país; mejoramiento en el sistema educativo nacional en cantidad y calidad; alimentación justa para toda la población; etcétera.

Todas estas medidas se entienden como una aplicación real de la democratización y la justicia social.

En este proyecto coincide el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), partido político afiliado a la Internacional Socialista, y que agrupa a un número considerable de intelectuales. No es un partido de masas, sino de élites, pero asumen en forma muy avanzada este proyecto. Su Secretario general es actualmente miembro de la Junta de Gobierno.

Aquí también hay que agrupar al Partido Demócrata Cristiano (PDC), con vinculaciones con la democracia cristiana internacional y que asocia a un grupo de intelectuales. Es un partido de masas que influye en la mayoría del electorado nacional. Es la principal fuerza política del país en esos términos. Cohesiona a sectores populares mediante el liderazgo de

José Napoleón Duarte. El actual ministro de la presidencia —vale decir, de la Junta de Gobierno— es un importante líder de este partido.

Las universidades más importantes del país (UCA y Universidad Nacional) coinciden con los planteamientos de la izquierda democrática y han contribuido a su difusión. Sin embargo, por razones que no discutiremos aquí, la Universidad Nacional está influida por las organizaciones populares de extrema izquierda. Esto hace que disminuya su presencia política en el espacio de la izquierda democrática. En cambio, la UCA ha sido abanderada en los planteamientos de la izquierda democrática. En este punto ha logrado articular desde hace algunos años un liderazgo académico-ideológico a nivel nacional. Actualmente su exrector es miembro de la Junta de Gobierno.

Desde su propia perspectiva, el sector progresista de la Iglesia católica, ha jugado un rol de liderazgo social ante los más disímiles sectores nacionales. Su postura evangélica ha coincidido con la izquierda democrática. Desde su nombramiento como Arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero ha sido el más importante opositor al régimen anterior. Actualmente apoya en forma crítica a la Junta de Gobierno.

Es en este sector de las clases medias en donde el gobierno surgido del levantamiento popular encuentra sus más firmes apoyos ideológico-políticos. Sin embargo, es un sector por definición antiviolento, lo cual hace que en una coyuntura insurreccional muestre limitaciones. De aquí que cuando el momento político sesga su característica principal hacia un ángulo militar, sus limitaciones se amplifican. La ampliación de esas limitaciones podrá constituir hacia el futuro las tácticas de los extremismos de derecha e izquierda, la razón básica aquí será hacer tambalear el más firme apoyo social de la Junta de Gobierno.

3.2.2. Derecha democrática de clase media

La forman los sectores de clase media que pertenecen a la burocracia gubernamental, y a los grupos profesionales que se benefician socioeconómicamente del *statu quo*.

Piensan que debe prevalecer un Estado de Derecho limitado a una esfera formal. No apoyan que de él se sigan las consecuencias socioeconómicas y socio-políticas que favorezcan a las mayorías populares. Para ello, el Estado de Derecho se limita a ser una justificación ideológica del *statu quo*. Son proclives a aliarse con la fracción más retardataria del capital nacional. Sus principales instrumentos de presencia social han sido los partidos oficiales y las asociaciones profesionales.

Actualmente están a la expectativa del lo que pueda suceder. Sin embargo, aquéllos ligados al partido oficial probablemente están rearticulando sus cuadros, ya sea para enfrentar el momento político, ya sea para prepararse hacia el futuro.

De suyo no constituyen una fuerza política importante si no es por su

alianza con el capital retardatario. Sin embargo, el PCN tiene como base campesina a ORDEN,¹⁸ la cual pudiera desempeñar un papel importante en una reacción generalizada de la derecha.

En conjunto esta derecha democrática no constituye por ahora un peligro importante para la Junta de Gobierno. Su papel dependerá de la reacción de la oligarquía terrateniente.

3.2.3. *El arbitraje de las fuerzas armadas*

Articulando la izquierda democrática con la derecha democrática aparecen en el esquema las fuerzas armadas. Por fuerzas armadas se entiende a la corporación militar en su conjunto, pero especialmente aquella fracción que se sublevó el 15 de octubre de 1979. Por articulación se quiere indicar que esa fracción contribuye a reunir los dos extremos del prisma democrático de clase media, y aporta una vinculación entre ellas con el establecimiento militar.

Esta fracción formada por militares jóvenes asumió en su proclama la validez de las demandas de la izquierda democrática, pero también reconoció la importancia de preservar los puntos de vista de la derecha democrática. La proclama es una síntesis de compromisos entre los sectores proclives a un equilibrio político que tiene como garantía al propio instituto militar salvadoreño. Esta es la principal fuerza, y la principal debilidad de la proclama y el movimiento militar.

En estos momentos, la realidad última del poder político en El Salvador, se encuentra en los militares sublevados, porque tienen en sus manos el monopolio de la violencia. Sin embargo este poder es orgánicamente débil en el plano de la propia corporación militar, porque el respeto a las jerarquías y a la institucionalidad castrense, han dejado intactos algunos elementos que estuvieron comprometidos con el gobierno depuesto.

Con esta articulación mediadora el establecimiento militar salvadoreño está reproduciendo objetivamente el rol político que ha jugado en las últimas décadas. La configuración histórica del fenómeno debilita las posibilidades del arbitraje porque por su peso y por su rol el establecimiento militar puede ser capaz —al menos teóricamente— de cumplir la proclama y viabilizar esa alternativa, como también capaz de no cumplirla y forzar a una alternativa extremo derechista. La fracción militar sublevada constituye en el corto plazo la principal garantía de la Junta de Gobierno.

3.3. *Clases sociales dominantes*

Aquí se agrupa a los sectores sociales salvadoreños que han tenido y tienen un control privado sobre el aparato productivo nacional: agrícola,

¹⁸ ORDEN no se ha clasificado como derecha democrática sino anti-democrática. Sin embargo, en este punto se le ve por la utilidad que pueda prestarle al PCN.

industrial y financiero. Se pueden distinguir dos fracciones que no tienen contradicciones irreconciliables, pero tienen diferencias importantes sobre el camino y el modo que debe asumir el proyecto capitalista en El Salvador.

3.3.1. *Derecha democrática de clase dominante*

Aquí se sitúa a la fracción de la clase dominante salvadoreña que se inclina por un desarrollo industrial mediante cambios en la estructura agraria y la renovación del proyecto de integración económica. En este sentido coincide con la izquierda democrática de clase media. Sin embargo, se diferencia de ella en que no deduce del Estado de Derecho todas las consecuencias socio-económicas y socio-políticas que puedan seguirse, sino que esas implicaciones las reduce al agro. Piensan que el agro debe servir de base para el desarrollo industrial, y serían las implicaciones de ese desarrollo las que generarían la satisfacción de las demandas que asume como proyecto la izquierda democrática de la clase media.

La derecha democrática de clase dominante se diferencia de la derecha democrática de clase media en que no confía la primera en la segunda debido a su desgaste político (sobre todo a nivel del PCN) y a su proclividad para aliarse con la fracción retardataria del capital. Estas diferencias son objetivamente ventajosas para la Junta de Gobierno porque favorecen la coalición de la izquierda democrática de clase media con la derecha democrática de clase dominante.

La derecha democrática de clase dominante se expresa por sus asociaciones gremiales (ASI, CIC). Cuenta con un partido político (PPS), pero éste ha sido históricamente débil. La derecha democrática de clase media se expresa por FEPRO y sus asociaciones particulares. De suyo no tiene canales de expresión política. En lo fundamental procura extraerse de la práctica política cotidiana para dedicarse al ejercicio privado de sus profesiones.

En conjunto, la derecha democrática de clase media ha sido relativamente indiferente ante el cambio de gobierno, y lo será mientras sus intereses profesionales no sean afectados. En cambio, la derecha democrática de clase dominante es un importante apoyo para la Junta de Gobierno. Su apoyo no reside tanto en lo que pueda hacer, cuanto en lo que no pueda hacer, para bloquear los planes gubernamentales representantes. Actualmente un representante de esa fracción forma parte de la Junta de Gobierno.

En todo caso, para la derecha democrática de clase dominante, la alternativa actual es una opción mejor entre la insurrección popular y/o la dictadura extremo derechista del capital agrario. En principio, su apoyo está garantizado para la Junta de Gobierno.

3.3.2. *Derecha antidemocrática*

Aquí ubicamos a la fracción de la clase dominante que se opone a cualquier cambio importante en la estructura agraria y en la tenencia de la tierra. Desea mantener la vigencia del modelo agroexportador con el café, el algodón y la caña de azúcar. Lucha por conservar intacto el control que posee sobre el aparato productivo nacional.

Ideológicamente, el marco-jurídico salvadoreño (que la Junta de Gobierno ha declarado que conservará), resulta para ello excesivamente avanzado y progresista. Se niegan a toda aplicación jurídica efectiva del concepto de propiedad privada en función social, y de todos aquellos otros aspectos que suponen la organización campesina y los mecanismos redistributivos de la riqueza y el ingreso nacionales. Han pasado a un plano histórico en que para conservar sus privilegios necesitan negar la misma constitución política que en algún momento promovieron.

Consideran que se debe respetar el proceso electoral, pero solamente cuando se permita el acceso al Estado de grupos que respetarán incondicionalmente sus intereses. En caso de que no suceda así, están dispuestos a su violación.

Se expresan por sus asociaciones gremiales. A diferencia de la derecha democrática de clase dominante, sus puntos de vista son de mayor beligerancia y exigencia para el respeto de sus intereses. Desde 1976, con ocasión del proyecto de transformación agraria, se encuentran coaligados en FARO.

Por falta de información no podemos afirmar su vinculación con grupos terroristas de extrema derecha. Sin embargo, así como sostuvimos las simpatías manifiestas de la administración Carter al golpe de Estado, así también podemos decir que ven con simpatía las acciones de la UGB, ORDEN y MANO. No sabemos cuál haya sido el nivel de articulación entre estos grupos terroristas, el gobierno anterior y la derecha antidemocrática, pero podemos afirmar que entre ellos había una coincidencia ideológica fundamental.

Hasta el momento, este sector de la derecha no se ha pronunciado ni a favor, ni en contra, de la Junta de Gobierno. Es posible aseverar que esto se debe a que está redefiniendo sus estrategias y sus tácticas. Históricamente han controlado de diversos modos al Estado y han bloqueado con eficacia los cambios inaceptables a sus intereses.

En conjunto la extrema izquierda y la derecha antidemocrática son los principales peligros políticos para la Junta de Gobierno. No tienen las mismas razones para serlo, pero al situarla como un enemigo común, pueden configurar un tipo de conflicto en el que los extremos colaborarían objetivamente. Sin embargo en esta rara "simbiosis histórica", tendría más posibilidades de aprovechar el conflicto a su favor la derecha antidemocrática, y la extrema izquierda podría correr el riesgo de un exterminio sistemático y masivo.

3.3.3. *La instancia articuladora entre las fracciones de la clase dominante: ANEP*

Las fracciones democrática y antidemocrática de la derecha de clase dominante resuelven sus diferencias por intermedio del máximo organismo de la empresa privada: ANEP. ANEP aparece en nuestro esquema vinculando esas dos tendencias de la clase dominante. Ese proceso articulador ha sido proclive a mediatizar las posiciones ideológico-políticas de los dos grupos, y a generar cohesiones de clase. Así sucedió con el proyecto de transformación agraria en 1976.

El punto fundamental aquí es la mediatización. Una suavización del extremismo de la derecha antidemocrática es conveniente para la Junta de Gobierno, pero una mediatización del otro sector no lo es; sin embargo, es casi imposible que una cosa ocurra sin la otra. Solamente si la derecha antidemocrática se ve obligada a refugiarse en FARO para diagramar su acción política, y la derecha democrática haga lo propio en ASI y CIC, es posible pensar que hacia el futuro se mantendrá seriamente el apoyo de la derecha democrática de clase dominante para el gobierno actual.

El proceso se definirá con el desenvolvimiento de la coyuntura política. Mientras tanto, la Junta de Gobierno deberá conservar un equilibrio entre las dos fracciones, procurando que éste se incline a su favor con el apoyo prioritario de la derecha democrática.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Este ensayo se ha escrito al calor de los acontecimientos: entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre. Esto explica en parte que el lenguaje usado sea poco riguroso. Sin embargo, se han cumplido los propósitos de escribirlo: dar cuenta razonablemente de la actual alternativa política y esquematizar las posibilidades y limitaciones que la coyuntura arrastra congénitamente. A partir de aquí se prefigura la explicación de la hipótesis inicial, aunque por falta de tiempo y material, no pueda haberse efectuado una prueba rigurosa de ella.

Con esas bases se pueden concentrar los siguientes puntos importantes:

1. Con ningún criterio válido se puede afirmar que se mantendrá la ubicación de los sectores políticos en el escenario nacional. Cambios inesperados son posibles (flaccidez del contorno de lo posible). Sin embargo, se puede sostener que el apoyo más sólido de la Junta de Gobierno descansa en la izquierda democrática de clase media. La solidez de este

apoyo se sustenta en razones ideológico-políticas, y no en vinculaciones con la estructura socioeconómica dominante.

2. En el campo de las izquierdas, el apoyo para el gobierno es hasta hoy débil. La extrema izquierda desconfía profundamente de la izquierda democrática. La izquierda tradicional confía mucho más en ella, pero entiende que tiene debilidades orgánicas para resistir los ataques de la derecha antidemocrática.

3. El establecimiento militar comprende que para él es una mejor alternativa la izquierda democrática de clase media que cualquiera de las izquierdas provenientes del campo de las clases sociales dominadas. Sin embargo, la ubicación de la izquierda democrática en el Estado les cierra a los militares un espacio usufructuado por ellos durante muchos años.¹⁹ No todas las fracciones de la corporación militar piensan así, pero aquellos que se beneficiaron recientemente de ese usufructo, es altamente probable que estén dispuestos a un cambio de rumbo.

4. En el campo de las derechas hay que hacer algunas distinciones. La derecha democrática de clase media en su vertiente profesional no tiene mucho que objetar, pero aquélla que formaba parte del PCN es posible que sienta como inminente su desaparición del escenario político. De aquí que ahora sea una "oposición oculta", pero si se activa la reacción de la ultra derecha, puede devenir en un acérrimo enemigo del gobierno actual.

La derecha democrática de la clase dominante ve el proceso como una alternativa a la revolución. Apoyará al gobierno hasta el límite en que no afecte sustancialmente sus intereses económicos, cosa que parece que no ocurrirá de manera inmediata. La derecha antidemocrática de clase dominante se opondrá frontalmente al gobierno si se encamina por el cumplimiento de la proclama de las fuerzas armadas.

5. En el campo internacional, la Junta de Gobierno recibirá el apoyo decidido de la administración Carter. No se vislumbra para el tiempo inmediato una variación en la perspectiva norteamericana. En las próximas semanas este apoyo se concentrará reabriendo las líneas de asistencia financiera y militar. Sin embargo, la política exterior norteamericana no es homogénea. Los puntos de vista del Departamento de Estado no coinciden siempre con los del Pentágono. Aun con todo, es la Casa Blanca quien articula las disidencias y en último término las define. Esta definición ya se había hecho con relación a El Salvador desde septiembre de 1979 (Informe Vaky).

6. En conjunto, la posición de la Junta de Gobierno será difícil. Limitaciones y posibilidades están a la vista para los próximos meses. En general, las limitaciones provendrán de los siguientes puntos: abrir un

¹⁹ Andino Martínez, Carlos. *Op. cit.*

proceso electoral cuando aún no existan las garantías necesarias para su efectividad; reformar las estructuras socioeconómicas sin bases de un apoyo popular unificado que neutralice la reacción de la derecha antidemocrática; implantar mecanismos sociales para articular en el proceso a las bases de la extrema izquierda; mantener la posición de arbitraje de las fuerzas armadas sin que éstas sufran un resquebrajamiento significativo; etcétera. El ámbito de las posibilidades se finca en el cambio operado en el bloque en el poder, y en las "esperanzas" de que configuren un conjunto de mediaciones políticas que hagan gobernable la conflictividad social.

7. Bajo el supuesto de que esta alternativa avance ¿se abrirá un proceso de democratización? En principio, la respuesta es afirmativa, si entendemos por proceso de democratización la historización de los siguientes puntos: participación política pluralista de los partidos en procesos electorales efectivamente libres; legalización de las organizaciones populares para plantear sus demandas a un tipo de gobierno que mediará para satisfacer por la vía de la negociación a demandantes y demandados; un reparto más equilibrado del ingreso nacional; un mejoramiento de la población en los niveles de salud, educación, trabajo, etcétera. En definitiva, todo aquello que garantiza plenamente el Estado de Derecho desde la perspectiva de la constitucionalidad salvadoreña.

Si por democratización se entiende algo distinto de esto, la respuesta es negativa. No caen en este esquema de democracia los siguientes puntos: el acceso de las masas populares al Estado para reorganizar desde su propia óptica a la sociedad salvadoreña; un reparto de la riqueza nacional en favor exclusivamente de las masas populares; la exclusión definitiva de los intereses norteamericanos al interior de la sociedad; etcétera. En definitiva, no son parte del proyecto actual aquellos puntos que constituyen el horizonte último de la izquierda tradicional, como tampoco de los que forman el inventario central de la extrema izquierda.

Si bien la democratización no se encamina en el segundo sentido, no puede ignorarse que una democratización en el primer sentido constituye un enorme avance para El Salvador, y quizás el único avance realmente posible en las actuales circunstancias. Este avance abriría a las clases populares unos espacios políticos, económicos y sociales que no han existido antes. Y esto no porque estén contenidos de suyo en el Estado de Derecho, sino porque ese Estado de Derecho funcionaría con un tipo de participación popular impensable hace diez años.

Se puede afirmar que el golpe de Estado inicia un camino hacia esa democratización. Cuánto sea lo que se avance por ese camino es una interrogante que todavía no puede responderse. Será el devenir histórico del proceso el que le de su real y última definición.